



NUE 141-A-2020 (AG)

██████████ contra Dirección General de Centros Penales -DGCP-
Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno.

Descripción del caso:

A. El presente procedimiento fue promovido por ██████████ en adelante “el apelante” o “el recurrente”, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales** (en adelante DGCP), el día cuatro de septiembre del año dos mil veinte, bajo la referencia UAIP/OIR/116/2020, procedimiento en el que solicitó información consistente en: “*Nómina de los integrantes de la Comisión del Fondo Único de Tiendas Institucionales: 1. Delegado del Ministerio de Hacienda; 2. Delegado del Ministerio de la Policía Nacional Civil; 3. Los tres servidores del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública*”.

Por su parte, la oficial de información de la **DGCP** resolvió: “*se transcribe respuesta emitida por la Coordinación de Tiendas Institucionales remitida mediante memorándum TIU 612-2020 que literalmente dice: en razón que la información solicitada implicaría proporcionar datos personales de las personas que ostentan los cargos requeridos; la suscrita se encuentra inhabilitada de proporcionarlos en razón de lo normado en los artículos 31 y 33 de la LAIP*”.

Al respecto, el apelante manifestó su inconformidad con la resolución emitida por la oficial del ente obligado por considerar que nómina y datos personales no son sinónimos; por lo tanto, solicitó que se le diera trámite y se le entregue la información requerida.



B. El Instituto admitió el recurso de apelación incoado por el ciudadano y designó al Comisionado Andres Gregori Rodríguez para que instruyera el presente procedimiento y elaborara el proyecto de resolución definitiva.

En plena observancia y respeto al derecho de defensa y audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el Art. 88 de Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se corrió traslado a la DGCP para que rindiera su informe justificativo. En dicho informe, el ente obligado manifestó que la información solicitada se encuentra en poder del Ministerio Público Fiscal, en razón del procedimiento de allanamiento con secuestro de información en la unidad de tiendas institucionales. Agregó que dicha diligencia fue autorizada por el Juzgado Especializado de Instrucción "C", mediante auto pronunciado a las ocho horas y treinta minutos del día ocho de septiembre de dos mil veinte.

Finalmente, señaló que con base al Art. 2 de la LAIP, el cual señala que toda persona puede solicitar información que se encuentre en poder de los entes obligados, expresa que lo requerido por el apelante no se encuentra en poder de esa institución, sino en poder de la Fiscalía General de la República, como resultado del allanamiento y secuestro de la información relacionada con las tiendas institucionales.

C. La audiencia oral del presente caso se llevó a cabo con la presencia del apelante [REDACTED] y en representación del ente obligado comparecieron Walter Alfredo Flores Castro y Carlos Javier Hernández Pérez, ambos en su calidad de apoderados de la DGCP.

En la fase probatoria de dicha audiencia, el apelante manifestó que no ofrecería elementos para ser incorporados como tal. Por su parte, el ente obligado ofreció como prueba documental: i) copia de la resolución de las ocho horas y treinta minutos del día ocho de septiembre del año dos mil veinte, pronunciada por el Juzgado Especializado de Instrucción "C" de San Salvador; misma que fue anexada al informe de ley del presente caso. El Pleno, previa deliberación, resolvió -por unanimidad- admitirla por considerar que es útil y pertinente al presente procedimiento, con base a lo establecido en los Arts. 317 al 320 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM).

Posteriormente, se llevó a cabo la fase de alegatos, en la cual la parte apelante argumentó -en lo medular-, que a su consideración no es lo mismo nómina que datos personales. Por otra parte, manifestó que la declaratoria de reserva que alega el apoderado de la **DGCP**, da indicios que no ha sido emitida conforme a la ley. Asimismo, señaló que la información requerida debió solicitarse a la Secretaría de la **DGCP**. En este sentido, requirió que se cumpla con la ley.

En cuanto a los alegatos brindados por el apoderado del ente obligado, argumentó -en lo medular-, que las tiendas institucionales sufrieron un allanamiento requerido por la Fiscalía General de la República, a consecuencia de una investigación que se encuentra en proceso por parte de dicha entidad. De igual forma, argumentó que a raíz de dicha investigación existe una declaratoria de reserva con base a lo establecido en el Art. 19 letra f) de la LAIP, en relación con el Art. 76 del Código Procesal Penal, lo cual fue avalado por el Juzgado de Instrucción "C" de San Salvador.

En este sentido, alegó que si el ciudadano tiene la necesidad de conocer la información que fue solicitada a la **DGCP**, dirija su petición al ente que posee la misma, es decir, que al requerir la nómina de los integrantes de la Comisión de Tiendas Institucionales, delegados por el Ministerio de Hacienda, Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, debe solicitarla a esas instituciones o en su defecto, para este caso, a la Fiscalía General de la República, ya que es dicho ministerio público quien la posee actualmente. Por tanto, solicitó que si este Instituto resuelve a favor de entregar la información, que sea solicitada a dicha Institución y no a la **DGCP**.

Análisis del caso:

Expuesto lo anterior, este Instituto ha determinado su pronunciamiento a fin de establecer si, en razón de los argumentos expuestos por la **DGCP**, se debe ordenar la entrega de la siguiente información: *"Nómina de los integrantes de la Comisión del Fondo Único de Tiendas Institucionales: 1. Delegado del Ministerio de Hacienda; 2. Delegado del Ministerio de la Policía Nacional Civil; 3. Los tres servidores del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública"*.



En este sentido, el análisis jurídico del presente caso seguirá el *íter* lógico siguiente: I) Breves consideraciones del principio de máxima divulgación y sus efectos; y, II) análisis del caso en torno al secuestro de la información requerida por el ciudadano, por parte de la Fiscalía General de la República.

I. Tal como ya lo ha sostenido este Instituto, el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el Art. 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”².

El Art. 4 letra “a” de la LAIP, establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados sea pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la CIDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en

¹ Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p

poder del Estado se presume pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos⁴ del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administre o se encuentra en poder de los entes obligados, son: a) El derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción; b) La carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada; y, c) Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación.

II. Expuesto lo anterior, para el caso en concreto, la DGCP alega que, debido al secuestro de la información solicitada por el apelante, por parte del Ministerio Público Fiscal, la misma no puede ser entregada; por lo que a efecto de acreditar sus argumentos, el apoderado del ente obligado ofreció prueba documental consistente en: *la copia de la resolución de las ocho horas y treinta minutos del día ocho de septiembre del año dos mil veinte, pronunciada por el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador.*

Entonces, corresponde en este apartado realizar la valoración de la prueba ofertada por el ente obligado, conforme a las reglas de la prueba tasada reguladas en los artículos 106 inciso tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos. Dicho lo anterior, visto el elemento probatorio descrito en el párrafo que antecede, este ente colegiado advierte que, efectivamente, ha existido una orden judicial que dio lugar a la realización de un allanamiento y secuestro de información solicitado por la Fiscalía General de la República a las Tiendas Institucionales de la **DGCP**.

Al respecto, es oportuno establecer en primer lugar, que la diligencia de registro y allanamiento⁵, como acto inicial de investigación persigue recoger elementos de prueba cuya pérdida es de temer, y cuya eficacia depende de su realización inmediata. En segundo lugar, respecto al secuestro de información, el Art. 283 del Código Procesal Penal (CPP)

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C’ N° 219, párrafo 230.

⁴ Relatoría especial para la libertad de expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁵ Sentencia definitiva pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso con referencia 105-2002, a las nueve horas y cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil tres



establece que el fiscal durante el desarrollo de las diligencias de investigación, dispondrá que sean incautados o recolectados y conservados los objetos o documentos relacionados con la comisión de un hecho delictivo y aquellos que puedan servir como medios de prueba.

Asimismo, la jurisprudencia⁶ define el secuestro de bienes como *un acto de orden procesal que consiste en la recolección y aseguramiento de ciertos objetos para su ingreso a control judicial con la finalidad de garantizar su identidad e integridad*. De igual forma, lo establece como *una medida cautelar de carácter patrimonial que consiste en aprehender o sustraer objetos, cosas, instrumentos o efectos relacionados con el hecho delictivo que se investiga*.

En esa línea, hay que mencionar que en razón de la naturaleza de un proceso judicial, tal como lo establece el Art. 191 del CPP, *cuando haya un motivo fundado para presumir que en un lugar público o privado existen objetos relacionados con la comisión del hecho punible que se investiga, o que allí puedan efectuarse detenciones, el fiscal deberá solicitar al juez la expedición de una orden de registro de ese lugar -siendo lo ocurrido en este caso-*.

Entonces, habiéndose dilucidado lo anterior y de conformidad con lo previsto en el Art. 76 del CPP, el cual establece que: *"[...] las diligencias de investigación serán reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir en el proceso"*, este Instituto determina que no es posible ordenar la entrega de la información solicitada por el ciudadano, debido a que se ha demostrado ante esta sede administrativa, que existen diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República en las Tiendas Institucionales de la DGCP.

En consecuencia, este Instituto como principal garante del derecho de acceso a la información pública, confirmará por esta vez el argumento de la DGCP, debido a la imposibilidad que concurre en la actualidad para que la DGCP pueda entregar dicha información.

⁶ Resolución pronunciada por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, a las doce horas del uno de febrero del año dos mil diecisiete. Referencia No. 32-2017.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 85 de la Cn, 58 letra "d", 94, 96 letra "d" y 102 de la LAIP, 79 y 135 de la LPA, este Instituto, **resuelve:**

a) **Confirmar por esta vez** la resolución pronunciada por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)**, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, bajo la referencia UAIP/OIR/116/2020, ante la imposibilidad que concurre en la actualidad para que la DGCP pueda entregar dicha información.

b) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, si así se considerase necesario.

c) **Archivar** el presente procedimiento al momento que la presente resolución tenga grado de firmeza.

d) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

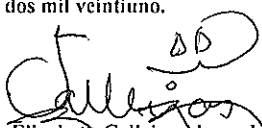
Notifíquese.-



**PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN**

IC/JH

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veintiuno.


Josselin Elizabeth Callejas Alvarado
NOTIFICADORA INTERINA
IAIP

